

Manizales 4 de abril 2019

Doctora

**GLORIA DEL SOCORRO VICTORIA GIRALDO**

Magistrada

Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras

T.S. de Cali

Ciudad.

Ref. Concepto Núm. 02. Radicado **20160003 01**

En calidad de representante del Ministerio Público, con fundamento en el numeral 7º del artículo 277 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral 1º del artículo 24, numeral 2º del artículo 38, artículo 45 del Decreto 262 de 2000 y artículo 86 literal d) de la Ley 1448 de 2011, comparezco a su despacho a fin de presentar el **concepto** en el asunto de referencia, conforme a las siguientes:

**CIRCUNSTANCIAS**

La señora **Flor Marina Muñoz Cortés, Hidalba, Nancy, Dora Liliana, Leidi Diana, Yorleny Restrepo Muñoz y Luz Mary Restrepo Torres** por conducto de la Comisión Colombiana de Juristas presentaron solicitud de restitución de tierras en nombre y a favor de las nombradas.

*Requisito de procedibilidad*

La Unida de Restitución de Tierras -en adelante **URT**- incluyó en el registro de tierras abandonadas y despojadas el predio “*San Luis-Santa Ana*” ubicado en la vereda el Viboral del corregimiento de Encimadas, municipio de Samaná Caldas, el cual se encuentra individualizado, mediante la resolución No. 0630 de 2015 conforme al inciso 5º del artículo 76 de la ley 1448 de 2011.

*Relación de las solicitantes con su núcleo familiar.*

La Flor Marina Muñoz Cortés tiene la calidad de titular de derechos gananciales y el resto (Hidalba, Nancy, Dora Liliana, Leidi Diana, Yorleny Restrepo Muñoz y Luz Mary Restrepo Torres) son titulares de los derechos herenciales al ser la primera de las nombradas esposa, y las otras hijas del propietario del bien señor *Luis Enrique Restrepo Ortiz* -fallecido-, quien contrajo matrimonio con Flor Marina Muñoz Cortés el 3 de mayo de 1.976, procreando a las citadas solicitantes, excepto a Luz Mary Restrepo Torres hija extra matrimonial del extinto Restrepo Muñoz.

El núcleo familiar de la señora Muñoz Cortés, para el momento de los hechos víctimizantes estaba conformado por su esposo y sus hijas Yorleny y Leidi Diana. Las otras hijas del matrimonio para la muerte del padre se habían ido a raíz del conflicto. Las solicitantes están inscritas en la **UV** como víctimas de los hechos víctimizantes de desplazamiento y desaparición forzada.

*Identificación del predio*

El bien es conocido con el nombre de San Luis-Santa Ana ubicado en el departamento de Caldas, municipio de Samaná corregimiento Encimadas vereda Viboral, con folio de matrícula No. 114-13541, cédula catastral No. 00-04-0006-0313-000 y un área georreferenciada de 16 Has 1.960 Mts. 2. Los linderos y colindancia figuran en la demanda.

No tiene ninguna limitación que afecte el derecho de dominio, tampoco existe barrera para la restitución jurídica y material del mismo.

*Los terceros determinados*

Dentro de la etapa administrativa (decreto 4829 de 2011) llevada a cabo por la **URT** y dentro del respectivo termino compareció el señor José Edilson Muñoz Ocampo, quien aportó un contrato de compraventa suscrito el 4 de marzo de 2006 con la hija de la solicitante Dora Liliana Restrepo Muñoz, donde le compra a esta el predio, también, copias de una letras de cambio y facturas de servicios públicos.

*Fundamentos de hecho*

Los hechos se encuentran debidamente documentados durante la actuación administrativa efectuada por la **URT**, como las declaraciones de las solicitantes (prueba fidedigna). Igual, con el documento análisis de contexto de la Unidad de Tierras; la relación de los hechos notorios y los hechos generales y particulares así:

Contexto general de violencia en el municipio de Samaná. Dentro de los anexos de la demanda figura el documento de la **URT** análisis de contexto de violencia municipio de Samaná del año 2015, donde se describe la violencia y disputa del territorio por parte de los grupos armados al margen de la ley, lo que ocasionó múltiples vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al DIH a la población civil de esta región del departamento de Caldas.

Del memorado documento se extrae, a manera de ejemplo, que en la década de los años 90 es en donde más se registra el principal escenario de la confrontación armada en el Eje Cafetero, y particularmente en la subregión del Magdalena Caldense de la que hace parte el municipio de Samaná, siendo los años 2000 a 2003 los picos o cruciales donde se evidenció los mayores niveles de violencia y desplazamiento, inclusive por encima de años anteriores, lo que repercutió en la grave crisis humanitaria y el drama (sufrimiento) de la población específicamente la campesina.

En el período 2000 a 2006 se recrudece el conflicto; viene el debilitamiento de las **FARC** y las negociaciones-desmovilizaciones de los paramilitares.

Por ejemplo los hechos víctimizantes de Samaná para los años 2001 a 2004 en la zona rural y cabecera municipal se presentan los mayores picos de desplazamiento masivos, registrándose, según la Pastoral Social e la Diócesis de La Dorada, Caldas un total de 30.012 desplazados.

Hechos víctimizantes del presente caso. El 4 de noviembre del año 2004 por los hechos de violencia perpetrados por las **FARC**, ocurre la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y el abandono del predio *San Luis Santa Ana*, pues en la zona había presencia de la guerrilla desde el año 1.995; quienes dormían debajo de la casa Flor Marina y veía como pasaban a la gente amarrada produciéndoles mucho miedo. En el gobierno de presidente Uribe el conflicto se agudizó, pues la guerrilla fue perseguida y estos lo hacían con la población para preguntar a quién habían visto; la guerrilla visitó al propietario del predio indagándole a quién había visto en la carretera, pero él les contestó que durante el viaje se dormía. Ese día mataron a tres guerrilleros cerca del bien y el propietario lo acusaron de haber ocultado [el hecho] y no haber querido decir. Que un niño en la finca se paró en una mina antipersonal. Que el 4 de noviembre de 2004 el dueño del bien Luis Enrique Restrepo Muñoz estaba solo y desapareció. La esposa Flor Marina Muñoz Cortés y sus hijas (Yorleny, Leidi Diana e Hidalba) unos días después se dieron cuenta que el esposo y padre había desaparecido. Este hecho lo denunciaron ante la Inspección de Policía de Samaná como en la Fiscalía y la Sijín de Manizales. La esposa del señor Luis Enrique Restrepo Ortiz salió a buscarlo sin encontrar rastro alguno; halló una pala untada de tierra detrás de la puerta de la cocina en la casa del predio. Ese día la guerrilla le dijo que el señor (esposo y padre) había solicitado permiso para irse, por lo tanto ella (la solicitante y sus hijas) también tenía que dejar el bien porque si no los mataban a todos. Este hecho víctimizante se prueba con el sistema VIVANTO donde figuran las solicitantes como desplazadas y desaparición forzada.

Reposa en el expediente copia de la sentencia condenatoria de fecha 8 de mayo de 2012 expedida por la Sala Penal del TS Manizales, contra Pedro Luis Pino Valderrama alias Martín, cabecilla de las **FARC**, por los delitos de homicidio en persona protegida y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; víctima *Luis Enrique Restrepo Ortiz*. En esa providencia se señala a los hermanos Wilson y Alberto Arias implicados en la muerte de Restrepo Ortiz como milicianos de la insurgencia.

Se acota que debido a los hechos víctimizantes que padecieron las solicitantes esto ha causado graves afectaciones psicosociales, como lo demuestra el informe psicosocial de daños individuales y familiares hecho por una psicóloga especializada en el tema (enfoque psicosocial en la atención a víctimas del conflicto) que obra en el expediente.

Además, como hecho víctimizante se cuenta que las solicitantes (Flor Marina Muñoz Cortés, Nancy y Dora Liliana Restrepo Muñoz) fueron secuestradas, por unas horas, por las **FARC** causándoles un trauma ante la incertidumbre sobre qué iba a pasar con ellas; si las torturarían o las desaparecían.

*Abandono del predio*

La causa o razón que motivó a la familia Restrepo Muñoz a abandonar el predio radicó a la violencia reinante en la región por las violaciones a los derechos humanos e infracciones al **DIH** por parte de las **FARC**. Así, se vieron forzadas a abandonar el bien como forma de salvaguardar sus vidas y la integridad personal, y debido a las amenazas de que fueron objeto y a la muerte del esposo y padre Luis Enrique Restrepo Ortiz.

*Despojo jurídico*

Las reclamantes perdieron el uso, goce y disfrute de la finca *San Luis Santa Ana* luego de la venta celebrada el 4 de marzo de 2006 entre el señor José Edilson Muñoz Ocampo (comprador) y la señora Dora Liliana Restrepo Muñoz, vendedora.

*Los perjuicios ocasionados por los hechos víctimizantes*

Durante la etapa administrativa los solicitantes dieron cuenta que en el predio tenían sembrado cebolla, tomate, caña, café y pasto. También había 12 reses; en café las hectáreas sembradas aproximadamente 10, el resto estaba en pasto, caña y monte, y había gallinas, una mula y animales domésticos.

Por ello, el núcleo familiar sufrió perjuicios materiales a causa directa del desplazamiento forzado y del abandono de la finca, aunado a la muerte del padre y esposo; perjuicios que deben ser indemnizados en su componente de daño emergente y lucro cesante.

Indudable es el nexo causal con el contexto de violencia, pues las solicitantes se vieron forzadas a abandonar el bien y desplazarse contra su voluntad para proteger sus vidas frente a los reiterados hechos violentos, todo por el conflicto armado interno y el contexto de violencia sistemática llevado a cabo durante la década de los años 90 en el municipio de Samaná, Caldas.

*Fundamentos de derecho*

Sirven como tal: La ley 1448/11, La Constitución Nacional, La Convención Americana de Derechos Humanos, Los Principios sobre la Restitución de Viviendas y del Patrimonio o Principios *Pinheiro*, los Principios rectores del Desplazamiento Interno y demás normas internacionales con fundamento en el bloque de constitucionalidad (art. 93 C.N.).

*La presunción del artículo 77 de la ley 1448/11*

El despojo jurídico operó en el presente caso, ya que las solicitantes perdieron definitivamente el uso, goce y disfrute del bien luego de la venta entre la solicitante Dora Liliana Restrepo Muñoz (vendedora) y José Edilson Muñoz Ocampo, el 4 de marzo de 2006, sumado a que este fue condenado por el punible de rebelión (juzgado penal del circuito) el 11 de agosto de 2006, como miliciano de las **FARC** frente 47. Así, que es aplicable la presunción de derecho del numeral primero del artículo 77 Ibi.

*Legitimación y relación jurídica con el predio*

El extinto Luis Enrique Restrepo Ortiz adquirió el predio San Luis Santa Ana por compra hecha al señor José Antonio Calderón Bedoya mediante la EP No. 602 del 1 de diciembre de 1.972 otorgada en la notaria única de Pensilvania, inscrita en el folio de matrícula No. 114-13541. Entonces, la esposa (Flor Marina Muñoz Cortés) y las hijas (Hidalba, Nancy, Dora Liliana, Leidi Diana, Yorleny Restrepo Muñoz y Luz Mary Restrepo Torres) de aquel a luz del artículo 81 de la ley de víctimas son titulares de derecho de gananciales, la primera, y herenciales las segundas, y están legitimadas para impetrar la acción de restitución.

*El impuesto predial*

El bien en la actualidad está siendo habitado por un agregado del señor José Edilson Muñoz Ocampo, por lo tanto, y de llegar a salir avante la restitución, los impuestos, en caso de existir, deben ser condonados desde la época del desplazamiento hasta que se produzca el retorno o la restitución por equivalencia.

*Restitución por equivalencia*

Las reclamantes haciendo uso de su derecho al retorno voluntario, decidieron no retornar al mismo y optan consciente y voluntariamente por la restitución por equivalencia, esto debido a las afectaciones graves y psicológicas de las accionantes y a las amenazas contra ellas.

*Pretensiones*

Proteger el derecho fundamental a la restitución de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, en concordancia con el derecho al goce a la verdad, la justicia y a la respectiva reparación integral de las solicitantes y sus núcleos familiares, como víctimas del conflicto armado interno mediante la restitución por equivalencia del predio San Luis Santa Ana; declarar la nulidad del negocio jurídico celebrado entre Dora Liliana Restrepo Muñoz y José Edilson Muñoz Ocampo; que se declare probada la presunción del numeral 1º del artículo 77 de la **LV**, así como la del numeral 2º; que se ordene a la Defensoría del Pueblo adelantar el proceso de sucesión del señor Luis Enrique Restrepo Muñoz; que se ordene al Fondo de Reparación de Víctimas de la Violencia indemnizar a las solicitantes por el daño moral causado por la muerte del padre y esposo de estas como garantía de la reparación integral, en el evento de no haber sido reparadas por la **UV**; que se ordene a la Unidad de Víctimas la entrega de las ayudas humanitarias al grupo familiar; que se ordene al Fondo de Reparación de Víctimas de la Violencia indemnizar a las solicitantes los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) causados por el desplazamiento forzado y abandono de la finca, y todas aquellas órdenes a los entes públicos para una verdadera reparación integral.

*Pruebas*

Que el operador judicial aplique la presunción de *fidedignidad* de las pruebas recaudadas por la **URT** en la etapa administrativa, para evitar así la duplicidad de pruebas y la dilación no justificada del proceso; también la aplicación de la *flexibilización de la prueba* según los artículos 77 y 78 de la ley 1448/11, esto es, la utilización de la prueba sumaria; los hechos notorios; la valoración de las copias simples de los documentos; la inversión de la carga de la prueba; las presunciones de derecho y legales. Y *el principio de la buena fe de las víctimas* (arts. 5 y 83 **LV** y **CN**.) Así mimos, acudir a la jurisdicción sustantiva y procesal ordinaria en caso de vacíos en la normatividad transicional, en toda caso con criterios de flexibilidad y favorabilidad respecto de las víctimas para determinar judicialmente los hechos del despojo y abandono forzado.

Pruebas aportadas. Tener en cuenta las siguientes pruebas:

Pruebas respecto a la identidad de las solicitantes y de sus núcleos familiares y el requisito de procedibilidad; prueba sobre la calidad de herederos y cónyuge supérstite del difunto Luis Enrique Restrepo Ortiz; pruebas de la identificación del predio objeto de restitución; pruebas con la naturaleza de la oposición; pruebas de los hechos víctimizantes, el contexto de violencia y los daños; pruebas referidas a las afectaciones particulares y a los hechos víctimizantes.

Solicitud de pruebas. Las relacionadas en la demanda en el acápite “*solicitud de pruebas*”.

*Anexos*

Los arrimados con el escrito de demanda y enumerados en la demanda con el número “*10*”.

*Del trámite*

Mediante auto del 14 de abril de 2016 el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierra de Pereira, Risaralda admitió la solicitud de Restitución de Tierras promovida por La señora **Flor Marina Muñoz Cortés, Hidalba, Nancy, Dora Liliana, Leidi Diana, Yorleny Restrepo Muñoz y Luz Mary Restrepo Torres** sobre el predio “*San Luis-Santa Ana*” ubicado en el departamento de Caldas, municipio de Samaná corregimiento Encimadas vereda Viboral, con folio de matrícula No. 114-13541, cédula catastral No. 00-04-0006-0313-000 y un área georreferenciada de 16 Has 1.960 Mts. 2.

Dentro de la oportunidad legal el señor **José Edilson** **Muñoz Ocampo**, mediante defensora pública, presentó oposición a la restitución del predio “*San Luis-Santa Ana”*. Decretadas y recaudadas las pruebas el expediente se remitió a la Sala Civil Especializada del T.S.C. para lo de su competencia. Art. 79 Inc. 3º **LV**.

*La Oposición*

El señor Muñoz Ocampo expresa que es de Samaná y que su grupo familiar lo conforman su esposa y seis hijos; que es transportador y debido a la presencia masiva de insurgentes fue condenado por el delito de rebelión a 9 meses y medio de prisión, como colaborador de la guerrilla. Pero que esta circunstancia no se relaciona con los hechos de esta solicitud de restitución. Que también es víctima de la violencia y está en el registro único de víctimas.

Que se sabía que la solicitante estaba vendiendo el predio, siendo con él con quien pudo concretar el negocio, el cual no está viciado, pues no hubo presión ni amenazas, ni mucho menos se aprovechó de las circunstancias; eran vecinos, víctimas de la violencia, todos se encontraban en igualdad de condiciones.

El negocio lo hizo con Dora Liliana Restrepo Muñoz el 4 de marzo de 2006; el valor del bien fue de $9 Mills de pesos y la escritura se haría en el año 2007 porque había que tramitar la sucesión del señor Luis Enrique Restrepo Ortiz. Posesionado del bien hizo mejoras; sembró caña de azúcar, café, plátano, yuca, aguacate e hizo una enramada. Que desconoce los motivos por los cuales las solicitantes abandonaron la finca.

Que es de buena fe exenta de culpa, pues no sacó provecho de las circunstancias; realizó un negocio de buena fe y cumplió con las obligaciones adquiridas…que es un campesino del sector y el producto de la finca sustenta a su familia.

**CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA JUDICIAL PARA LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS**

*La legitimación en la causa por activa*.

La misma concurre en las reclamantes, quienes poseían el terreno en el momento en que fueron desplazadas del mismo, como consecuencia de hechos que configuran las violaciones de que trata el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, ocurridos en el término previsto en el artículo 75 ibídem y, además, se advierte el cumplimiento del requisito de procedibilidad relativo a la inscripción del predio en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente. Art. 76 Inc. 5º ley 1448 de 2011.

*El problema jurídico*

Para la Procuraduría, *en esencia*, el asunto a resolver pasa por constatar ***(1)*** si se cumplen los presupuestos constitucionales y legales para disponer la restitución jurídica y material del predio solicitado por la señora Flor Marina Muñoz Cortés, Hidalba, Nancy, Dora Liliana, Leidi Diana, Yorleny Restrepo Muñoz y Luz Mary Restrepo Torres y la adopción en su favor y de su núcleo familiar, de otras medidas con carácter reparador, y de ser así, ***(2)*** se analizarán los argumentos invocados por el señor José Edilson Muñoz Ocampo al oponerse a la restitución y si le asiste derecho a la compensación establecida en la ley.

*La existencia de un conflicto armado en Colombia*

La jurisprudencia constitucional, en muchedumbre de pronunciamientos, es consistente al decir que los actores, en el contexto de la lucha por el control territorial, político y económico, han cometido graves, masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario; ejecuciones extrajudiciales, masacres, desapariciones forzadas y torturas, hechos de violencia que han obligado a la población civil (generalmente mujeres cabeza de hogar, niños, niñas, personas de la tercera edad y campesinos) a abandonar sus hogares, a desplazarse de sus tierras, a dejar atrás las actividades económicas de las cuales provenían su sustento y el de sus familias, para reubicarse en otros sitios, donde no cuentan con redes familiares y sociales de apoyo, en circunstancias adversas que no les permiten superar las condiciones de marginalidad y vulnerabilidad, viendo destrozados en forma continua y permanente sus derechos fundamentales.

Por ende, ley 1448 de 2011 estableció una etapa administrativa y judicial para el reconocimiento de las víctimas y la reparación integral del daño sufrido.

*La definición de víctima*

Conforme al artículo 3º ibídem en la definición de víctima concurren varios elementos: *(a)* *naturaleza:* el daño es causado por violaciones al **DIH** y al **DD-HH**; *(b)* *temporal:* que deben haber ocurrido a partir del 1° de enero de 1991 y hasta el término de vigencia de la ley, que es de 10 años; y *(c) contextual:* debe tratarse de hechos ocurridos con ocasión del conflicto armado interno; y acorde con la interpretación expuesta por la Corte Constitucional en las sentencias, por ejemplo, C-781 de 2012.

Ahora, la calidad de víctima no requiere de una declaración o registro previo, pues surge del hecho mismo de haber sufrido daños como consecuencia de las referidas infracciones, por consiguiente tiene derecho a la reparación integral en los términos del artículo 25 de **LV**.

*La restitución de tierras componente de la reparación integral*

A la restitución, en línea de principio, tienen derecho las personas que siendo propietarios o poseedores de predios privados, o explotadores de baldíos cuya propiedad pretendían adquirir por adjudicación, se vieron forzados a desplazarse, esto es, que para salvaguardar su vida, integridad personal, seguridad o libertad personal y de su familia, vulnerados o amenazados en el contexto de violencia referido, tuvieron que marcharse obligadamente y dejar abandonadas sus tierras; o bien, fueron despojados de ellas de hecho, o mediante negocios jurídicos torticeros o actos jurídicos fraudulentos, revestidos de arbitrariedad y provecho indebido de la situación de vulnerabilidad en que se encontraba la víctima, precisamente en razón de la transgresión de sus derechos humanos.

No puede soslayarse que el abandono y el despojo producen la expulsión de las víctimas y la vulneración de sus derechos fundamentales.

De otra parte, los distintos pronunciamientos judiciales coinciden en que el derecho a la restitución de las tierras de que la víctima ha sido despojada o que se vio obligada a abandonar, es un derecho fundamental *per se*, independiente del retorno, no obstante lo cual y atendiendo a las finalidades de la ley, deben tenerse en cuenta las particulares circunstancias que permitan garantizar el goce efectivo del derecho, la implementación de las medidas orientadas a la reconstrucción del proyecto de vida del reclamante y su núcleo familiar, así como la reconstrucción del tejido social y comunitario que se deshizo con su partida.

*Identificación del predio objeto de restitución*

El bien pedido en restitución por parte de las solicitantes corresponde a un inmueble rural ubicado en la vereda el Viboral corregimiento de Encimadas municipio de Samaná, Caldas identificado con la matrícula inmobiliaria No. 114-13541 y Código Catastral 17-662-00-04-0006-0313-000, con un área georreferenciada de 16 Has 1.960 Mts. 2, en el cual se incluyen las coordenadas geográficas (**SIRGAS**) y coordenadas planas (Magna Colombia Bogotá). Este inmueble es de naturaleza privada, pues no hay prueba que señale lo contrario.

*El abandono forzado de la tierra objeto de estudio*

Necesario es recordar cómo la ley de víctimas (art. 74) concibe el abandono forzado; “*se entiende por abandono forzado de tierras la situación temporal o permanente a la que se ve abocada una persona forzada a desplazarse, razón por la cual se ve impedida para ejercer la administración, explotación y contacto directo con los predios que debió desatender en su desplazamiento durante el periodo establecido en el artículo 75”*.

Ahora, la descripción de desplazado contemplada en el artículo 1º de la ley 387 de 1.997 no está muy lejana de la considerada en la ley de víctimas[[1]](#footnote-1).

Sobre el tópico se trae a colación al ex director de la Unidad de Restitución de Tierras Ricardo Sabogal Urrego, quien en su artículo “*los mecanismos de la acción de restitución de tierras: garantías para las víctimas y la reconciliación*” año 2018 -lecturas sobre derecho de tierras Universidad Externado de Colombia págs. 182 y 183- colige que de la definición (arriba transcrita) se percibe que el abandono forzado “*es un acto antijurídico que deviene de la condición fáctica de desplazamiento forzado, donde el sujeto pasivo es compelido a desatender, temporal o permanentemente, las facultades de usar, gozar, y disponer de las relaciones jurídicas de propiedad, posesión u ocupación en relación con su predio, dado que, por el temor provocado por un contexto de violencia (caracterizado por violaciones graves y manifiestas a la dos derechos humando se infracciones al DIH), o insuperable coacción violenta, se ve obligado a abandonar forzadamente el predio y, en efecto a no tener contacto* [directo, se agrega] *con el inmueble*”.

Así, pues, es condición que la persona que enfrenta un desplazamiento forzado (temporal o permanente) quede *(a)* en imposibilitada para llevar a cabo la administración y explotación económica del predio, *(b)* como la relación continua, *in sitiu*, con el inmueble que debió abandonar. Y esto apareja, lógicamente, la administración y la explotación al igual que el contacto inmediato con el bien, pues de no ser así entonces de ¿qué se vería impedida la persona?[[2]](#footnote-2)

Obra en el expediente (entrevista socio jurídica ante la **URT** del 14 de marzo de 2014) la narración de los hechos víctimizantes particulares, esto es, de la desaparición forzada, desplazamiento forzado y del abandono del predio por parte de la señora Flor Marina Muñoz Cortés (esposa) e Hidalba, Nancy, Leidi Diana, Yorleny, Liliana Restrepo muñoz y Luz Mary Restrepo Torres, hijas, de Luis Enrique Restrepo Ortiz. Estas personas ostentan una historia de vulneraciones en sus derechos que se desprenden del conflicto armado interno; hostigamientos, señalamientos de las **FARC**, lo que produjo miedo y zozobra. Luego la desaparición forzada, con la consecuente muerte del señor Restrepo Ortiz, y el abandono obligado del inmueble (San Luis Santa Ana). Igualmente, la imposibilidad de retornar a la finca por la intensidad de la confrontación en la región, aunado a las constantes amenazas lanzadas contra los descendientes y esposa del extinto Luis Enrique…y la venta posterior del bien al señor José Edilson Muñoz Ocampo el 4 de marzo de 2006.

Pero concretamente los hechos víctimizantes (los que no fueron infirmados por quien tenía la carga procesal de hacerlo), detonantes del desplazamiento y abandono del bien (ligado a la desaparición forzada del titular de la finca), relatados en audiencia por Flor Marina Muñoz Cortés, Dora Liliana, Hidalba, Nancy, Leidi Diana Restrepo Muñoz, se contraen, a que el 4 de noviembre del año 2004 por los hechos de violencia perpetrados por las **FARC**, ocurre la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y el abandono del predio *San Luis Santa Ana*, pues en la zona había presencia de la guerrilla desde el año 1.995; los integrantes del frente 47 de las **FARC** azuzaban a las hijas de la señora Flor Marina Muñoz Cortés (Leidi Diana, Dora Liliana y Yorleny Restrepo Muñoz) para que se incorporaran a las filas, además, por la ubicación de la heredad permanecían y dormían debajo de la casa; Flor Marina veía como pasaban a la gente amarrada lo que les producía mucho miedo. Así, durante el gobierno de presidente Uribe el conflicto se agudizó, pues la guerrilla fue perseguida y estos a la vez lo hacían con la población para preguntar a quién habían visto; la guerrilla visitó al propietario del predio indagándole si había observado personas en la carretera, ya que iba a la finca a trabajar y volvía a Manizales donde estaban viviendo dos de sus hijas y su esposa -que se habían desplazado por las recurrentes amenazas de reclutamiento-, pero él les contestó que durante el viaje siempre se dormía. Ese día mataron a unos guerrilleros cerca del bien y el propietario lo acusaron de haber ocultado [el hecho] y no haber querido decir. Que un niño en la finca se paró en una mina antipersonal. Que el 4 de noviembre de 2004 el dueño del bien Luis Enrique Restrepo Muñoz estaba solo y desapareció. La esposa Flor Marina Muñoz Cortés y sus hijas (Yorleny, Leidi Diana e Hidalba) unos días después se dieron cuenta que el esposo y padre había desaparecido. Este hecho lo denunciaron ante la Inspección de Policía de Samaná como en la Fiscalía y la Sijín de Manizales. La esposa del señor Luis Enrique Restrepo Ortiz salió a buscarlo (fue a la finca con sus hijas Nancy y Dora Liliana Restrepo Muñoz) sin encontrar rastro alguno, y fueron secuestradas, por unas horas, por las **FARC** quienes las amenazaron y les dijeron que no podían regresar a la finca. La solicitante halló una pala untada de tierra detrás de la puerta de la cocina en la casa del predio. Ese día la guerrilla le dijo que el señor (esposo y padre) había solicitado permiso para irse, por lo tanto ella (la solicitante y sus hijas) también tenía que dejar el bien porque si no los mataban a todos. Al señor Restrepo Ortiz lo asesinaron y enterraron en el predio “*San Luis Santa Ana*”, por información suministrada a los cuatros año por un desmovilizado del aludido frente; las reclamantes son enfáticas sobre el hecho que los vecinos acusaron al desaparecido y ultimado padre y esposo de ser informante del ejercito…El bien, una vez se desplazaron las solicitantes, quedó bajo encargo del señor Jhon Fredy Arias quien estuvo dos años y usufructuó de lo que producía la finca; también estuvieron Berto y Wilson Arias milicianos de las **FARC** detenidos y condenados.

Para esta Agencia del Ministerio Público no pasa desapercibido que en el año 1.994 la solicitante Nancy Restrepo Muñoz fue víctima de violencia sexual por los insurgentes, como angustiosamente lo contó en audiencia.

Abandonada la tierra, producto de los hechos víctimizantes, en el predio quedaron los hermanos Arias residentes de la zona, quienes están condenados y detenidos por pertenecer a la guerrilla, y participar en la muerte violenta del señor Restrepo Ortiz.

Corrobora la desaparición forzada y posterior muerte del dueño de la finca objeto de pedimento restitutorio, la copia de la sentencia condenatoria de fecha 8 de mayo de 2012 expedida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Manizales, contra Pedro Luis Pino Valderrama alias Martín, cabecilla de las **FARC**, por los delitos de homicidio en persona protegida y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; víctima *Luis Enrique Restrepo Ortiz*. En esa providencia se señala a los hermanos Wilson y Alberto Arias implicados en la muerte de Restrepo Ortiz como milicianos de la insurgencia.

Del haz probatorio sin dificultad, pues no se allegó prueba en contrario, se determina que el abandono del bien tuvo como génesis, no la voluntad de las solicitantes, sino la imperiosa necesidad de salvaguardar derechos inherentes a las personas; la vida y la integridad personal de la familia Restrepo Muñoz -lo que se hace extensivo a la hija extramatrimonial del difunto, Luz Mary Restrepo Torres-. Derechos, hay que recordarlo, consagrados en nomas con rango internacional que hacen parte de bloque de constitucionalidad, sin dejar de lado los hechos intimidatorios y violentos ejercidos contra las reclamantes emanados del grupo insurgente radicado en la zona (**FARC**).

Las citadas afectaciones sufridas por la esposa e hijas del señor Luis Enrique Restrepo Ortiz, desaparecido y ultimado por la subversión, que ocasionó el abandono forzado del predio en el año 2004, se instalan dentro del marzo temporal de la ley 1448 de 2011 artículo 75

Si bien la condición de víctima de una o varias personas no pende del reconocimiento que como tal haga el Estado, no es menos cierto, y de ello obra la respectiva prueba, que las solicitantes, según el aplicativo **VIVANTO**, se encuentran registradas en el **SIPOD** como víctimas de desaparición y desplazamiento forzado por hechos acontecidos en 6 de octubre de 2004. Esta información más las declaraciones de las solicitantes -abrigadas por la presunción de buena fe- prueban, *fehacientemente*, la condición de víctimas de desaparición forzada; muerte del esposo y padre, y desplazamiento forzado, lo que las hace acreedoras del derecho fundamental a la *restitución*.

*Restitución por equivalencia artículos 72 Inc. 5º y 97* ***LV***

Sin necesidad de presentar prolijos argumentos la Procuraduría pide a la Sala de Tierras acceder a la justa petición de las solicitantes (principio de voluntariedad) de no querer regresar al predio, pues eso les revive todo el escenario de agresiones físicas y psicológicas que padecieron en aquel terruño, amén que les recrea la trágica muerte del esposo y padre que tan inconmensurable dolor, *aun hoy*, les produce. También sostiene la *restituere* *equivalent* el hecho objetivo que los familiares de los hermanos Arias, condenados por participar en la desaparición forzada y muerte del otrora propietario de la finca, colindan con el predio a restituir, más las amenazas que la peticionarias recibieron.

Así, debe ordenarse, como medida de reparación-restauración, la entrega de otro predio a la masa sucesoral del de *cujus* (Luis Enrique Restrepo Ortiz)cerca de la ciudad de Manizales, Caldas, donde residen varias de las solicitantes.

*Contexto de violencia acaecido en la zona de ubicación del predio pedido*

Los hechos derivados del conflicto armado en el departamento (Caldas), municipio (Samaná), corregimiento (Encimadas) vereda (Viboral) donde se halla el predio objeto de esta solicitud (“*San Luis Santa Ana*”), generadores de los hechos víctimizantes, esto es, de la desaparición forzada; abandono forzado y despojo, indudablemente son un hecho notorio -relevados de prueba- en lo que va de vigencia de la ley de víctimas. Sin embargo, en la foliatura obra prueba, suficiente, sobre el tópico, como:

El informe de análisis de contexto del municipio de Samaná, elaborado por la **URT**; copia del oficio (No. S-2014-011425/SIPOL-GRUPI 29 de mayo de 2014) proveniente del Minidefensa (Policía Nacional) contentivo del diagnóstico de seguridad para la microfocalización del municipio de Samaná; Copia del documento “*Dinámica reciente de la confrontación armada en Caldas*”, donde se describen los hechos de violencia ocurridos en el departamento de Caldas durante el conflicto armando; los oficios de la Alcaldía de Samaná relacionando los desplazamientos forzados durante los meses de abril a noviembre de 2005; copia de la amenaza de Wilson Arias Zapata a las solicitantes etc.

Es decir, para esta Agencia del Ministerio Público no existe un resquicio de duda sobre la violencia ocurrida, y padecida por las solicitantes, y ejercida por el frente 47 de las **FARC** en el sector donde está el predio a restituir; las amenazas que los insurgentes lanzaban para que se unieran a sus filas; la extorsión, la presión física y psicológica; los secuestros; el minado de los caminos; la permanencia forzosa en las diferentes fincas; el amedrentamiento a las familias campesinas; las desapariciones…todo el cúmulo constante de violación de los derechos fundamentales de la población rural que produjo el abandono masivo de las propiedades y los consecuentes despojos.

Para el caso concreto, las circunstancias violentas y confrontaciones documentadas y demostradas, descritas en la demanda, dieron pie para que la solicitante y sus hijas se desplazaran obligatoriamente del predio (propiedad del desaparecido y asesinado dueño, señor Luis Enrique Restrepo Ortiz) por el temor que le generó las amenazas del frente 47 de las **FARC**. Está así acreditado, plenamente, el abandono forzado de su inmueble, del cual eran herederas, unas, y con derecho a gananciales, otra, estructurándose los presupuestos legales para que salga avante la restitución demandada.

*La oposición a las pretensiones de la demanda de restitución*

De la misma es suficiente decir, pues sobre el particular la Procuraduría se remite a lo consignado (“*La oposición*”) en líneas precedentes, que el señor José Edilson Muñoz Ocampo se opone al alegar que es poseedor de buena fe exenta de culpa, ya que compró el bien a una de las solicitantes; que pagó el precio; que no ejerció ningún tipo de presión para que el negocio se llevara a cabo; que en todos los años que lleva en el bien le ha hecho mejoras, y que del producido de la tierra deriva el sustento para su familia etc.

La jurisprudencia patria es unánime al señalar que existen tres formas de promover la contradicción dentro del proceso de restitución de tierras, cuya naturaleza y características fueron decantadas por el máximo tribunal constitucional (sentencia C-330 de 2016), a saber: *i)* desvirtuándose la calidad de víctima del solicitante, *ii)* enderezándose la defensa a acreditar su propia condición de víctima de despojo respecto del mismo predio, en relación con el cual se pide la restitución, y *iii)* la que se edifica sobre la comprobación de la existencia de una relación jurídica o material con el inmueble, la que ha tenido su génesis en el despliegue de comportamiento animado por la buena fe exenta de culpa.

*La buena fe exenta de culpa*

Es exigencia, *absoluta*, que el opositor a su escrito de oposición acompañe los documentos que quiera hacer valer como prueba de la *buena fe exenta de culpa*, entre otros requisitos (art. 88 Inc. 3º ley 1448/11). Amén que en la sentencia se hace pronunciamiento sobre las compensaciones a que hubiera lugar, a favor del opositor que prueba la buena fe exenta de culpa dentro del proceso (arts. 91, 98 y 108 Ib.). Pero esta *bonum fidei* cualificada fue relativizada según la sentencia C-330 de 2016, en el entendido que la eximente o quita de culpa “*es un estándar que debe ser interpretado por los jueces de forma diferencial, frente a los segundos ocupantes, que demuestren condiciones de vulnerabilidad, y no hayan tenido relación directa o indirecta con el despojo*”[[3]](#footnote-3).

Además, corresponde, *carga*, al opositor demostrar que en la actuación que lo condujo a detentar el predio su conducta se ajustó a derecho y su motivo fue honesto y recto, sin la voluntad, *al mismo tiempo*, de causar daño mucho menos de aprovecharse de la situación de quebrando o fragilidad en que se encontraban las víctimas.

Los constantes y reiterados pronunciamientos de los tribunales de tierras patrios son unánimes al sostener que la buena fe calificada impone que el derecho que se pretende oponer al reclamante esté consolidado en los términos exigidos por la ley, es decir, que quien es su actual titular lo haya adquirido con las ritualidades exigidas por la normatividad, de acuerdo con el tipo de bien y los modos de adquirirlo, de tal forma que sea un plausible fundamento de su certeza, de la legitimidad del derecho que ostenta, convicción que no resultaba posible desvirtuar, pese a las averiguaciones diligentemente realizadas para su comprobación.

Y lo anterior, *per se*, obliga al opositor a acreditar las gestiones que con la debida rigurosidad y prudencia realizó, para verificar que el bien que pretendía adquirir, tenía una procedencia legítima y que con su actuar, no estaba desconociendo los derechos de su titular.

La Corte Constitucional en sentencia C-740 de 2003 al tratar el tema del principio de la buena fe indicó:

*"Pero, para su aplicación, en los casos en que se convierte en real un derecho o situación jurídica aparentes, para satisfacer las exigencias de buena fe, se requiere el cumplimiento de los siguientes elementos:*

*"a) Que el derecho o situación jurídica aparentes, tenga en su aspecto exterior todas las condiciones de existencia real, de manera que cualquier persona prudente o diligente no pueda descubrir la verdadera situación. La apariencia de los derechos no hace referencia a la creencia subjetiva de una persona, sino a la objetiva o colectiva de las gentes. De ahí que los romanos dijeran que la apariencia del derecho debía estar constituida de tal manera que todas las personas al examinarlo cometieran un error y creyeran que realmente existía, sin existir. Este es el error communis, error común a muchos.*

*b) Que la adquisición del derecho se verifique normalmente dentro de las condiciones exigidas por la ley; y*

*c) Finalmente, se exige la concurrencia de la buena fe en el adquirente, es decir, la creencia sincera y leal de adquirir el derecho de quien es legítimo dueño'''.*

*En conclusión, aunque un bien haya sido adquirido por compra o permuta pero provienen directa o indirectamente de una actividad ilícita, el tercero adquirente del mismo debe ser protegido si demuestra haber obrado con buena fe exenta de culpa y por lo tanto no tendrá que soportar las consecuencias de la extinción de dominio".*

Por tanto, al opositor no le alcanza con aseverar que no actuó de mala fe, sino que debe dirigir su gestión a probar completamente que su proceder, no solo no fue lesivo para el reclamante, sino que la certeza de la corrección de su conducta tenía un seguro fundamento.

*La buena fe exenta de culpa (hecho calificado), en el caso del opositor José Edilson Muñoz Ocampo, constituye la regla general que debe observarse*

En este apartado, señora Magistrada Ponente, la Procuraduría plantea el siguiente problema jurídico: ¿es de buena fe cualificada una persona que ha vivido en la región de ubicación del predio a restituir, que conoció el desarrollo brutal y violento de la subversión en la vereda; que adquiere el bien, el cual hace parte de una herencia sin liquidar, sin el cumplimiento de las ritualidades exigidas por las normas para ese tipo de negocios jurídicos, y que recién toma posesión real y material es condenado por el delito de rebelión como miembro activo del frente 47 de las **FARC**, victimario de las solicitantes?

La respuesta al problema jurídico es no, según lo demostrado y sustentado durante el devenir procesal. Para el Ministerio Público no es de buena fe exenta de culpa por lo que sigue:

El opositor (José Edilson Muñoz Ocampo) ha vivido en la región (58 años) y conoció el fenómeno de violencia existente en Samaná -era transportador-, en virtud del cual se vulneraron los derechos humanos y se cometieron infracciones al **DIH**, no solo de las reclamantes, sino de la población radicada en la zona rural del municipio de Samaná, como está ampliamente documentado dicho fenómeno. Él sabía, *de primera mano*, de la pésima situación económica de las solicitantes, -7 mujeres solas-, de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la muerte violenta del esposo y padre (Luis Enrique Restrepo Ortiz), previa desaparición forzada, y del altercado con los vecinos de apellidos Arias por la bocatoma del agua; que el grave e irresistible temor de las desplazadas les impedía volver al bien. Así, pues, se aprovechó de la situación para hacerse a la finca por un menor precio ($9 Mills) que no terminó de pagar; donde los parámetros de fijación del valor que tuvo en cuenta fueron, *básicamente*, el estado de abandono de la heredad, y la poca inversión en finca raíz en el municipio de Samaná, dada la confrontación que se libraba; era conocedor, *como el que más*, que el conflicto armado en Samaná disminuía *ostensiblemente* el costo de la propiedad (rural y urbana) y que el instinto de conservación de los pobladores era uno: abandonar, a como diera lugar, todo un proyecto de vida materializado en la tierra.

Solo con leerse la declaración-confesión que Muñoz Ocampo da a la **URT** el 15 de octubre de 2014 el punto aflora con inusitada fuerza. Describiendo las circunstancias en que se llevó la transacción del predio dijo:

“*Yo me di cuenta en Samaná que doña Flor* [la solicitante] *quería vender la finca, que porque no podía volver por allá* [a Encimadas], *porque* [afirma] *la amenazaron seguro; a ella le mataron el esposo* [Luis Enrique Restrepo Ortiz]…”.

Y de cara a si la solicitante Dora Liliana Restrepo Muñoz con quien suscribió el contrato de venta del predio (“*San Luis Santa Ana*”) le ofreció el bien, es claro su relato:

*“En esa época salió un proyecto con Empaques de Medellín de siembra de fique, y a mí me sonó el proyecto y me puse a buscar un predio y me encontré con ese* [“*San Luis Santa Ana*”], *porque el mismo papá de Doña Flor, DON LUIS JOSÉ MUÑOZ me dijo que ella lo estaba vendiendo. Yo fui solo y lo miré y el predio estaba muy abandonado. Entonces, ella me pidió algo así como QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000). Había personas que le ofrecían CINCO, SIETE MILLONES y ella decía que “eso valen lo cercos”, y la verdad es que el predio por lo que estaba tan abandonado valía poco y además en esa época nadie invertía en finca raíz. En Samaná conseguía uno casa en CINCO MILLONES…*”.

Pero además, el opositor, y contrastando lo expuesto por este ante la **URT** con el conjunto de pruebas que hacen parte de la instrucción, miente sin rubor y descaradamente (faltó al deber de decir la verdad y nada más que la verdad). Por ejemplo, en cuanto a su pertenencia como miliciano de las **FARC**, admite que no fue condenado, pero que estuvo en la cárcel por ser transportador; expresa no saber nada sobre las circunstancias de la muerte del señor Luis Eduardo Restrepo Ortiz, y menos de las personas que estuvieron comprometidas en el execrable crimen; sobre el motivo que lo indujo a adquirir el predio; que no recuerda la fecha en que lo condenaron por rebelión; ignora si los señores Adalberto, Roberto, Wilson Arias estuvieron comprometidos en el atroz crimen del señor Restrepo Ortiz; dice no saber las razones que llevaron a las solicitantes a vender la finca, y que no conoció a los cabecillas (Henry Saldarriaga Valencia y Wilmer Fabián Osorio) del frente 47 de las **FARC** quienes se afianzaron en el sector etc.

Ahora, el “*contrato de compraventa*” -documento privado- de fecha 6 de marzo del año 2006, por el cual la solicitante Dora Lilian Restrepo Muñoz vende a José Edilson Muñoz Ocampo la finca objeto de esta solicitud, no puede apreciarse, estimarse o calificarse perfecta ante el *derecho privado*, ya que no se hizo, *otorgar*, mediante escritura pública (arts. 1857, 749 y 756 C.C.). Pero además, y removiendo el requisito *sine qua non* puesto de presente, la transacción enunciada siembra muchas dudas que apuntan al fin trazado por el comprador: *el aprovechamiento de la situación de violencia sufrida por las solicitantes para despojarlas de su herencia*, puesto que la vendedora solo podía disponer de su derecho herencial correspondiente en la mortuoria de su progenitor, y no del resto de derechos de las otras herederas, y menos de lo que le pertenece a la cónyuge sobreviviente.

Respetuosamente señora Magistrada Ponente esta delegada es de la siguiente opinión: no hay duda que las víctimas reclamantes fueron despojadas de los derechos que les corresponde en el predio, el cual hace parte de la sucesión del difunto Luis Enrique Restrepo Ortiz. Esto, claro está, fieles a la definición que de despojo trae la ley 1148 de 2011 en su artículo 74 inciso 1º[[4]](#footnote-4).

Para el ex director de la Unidad de Restitución de Tierras “*de acuerdo con la noción legal* [art. 74 Inc., 1º ley 1148 de 2011]*, y atendiendo su naturaleza jurídica, el despojo es un acto antijurídico que afecta directa o indirectamente, las relaciones jurídicas de propiedad, posesión u ocupación, en medio de una situación de violencia a través de fuentes fácticas o jurídicas, tales como negocios jurídicos, actos administrativos, sentencias judiciales o la comisión de delitos asociados a la situación de violencia. Por lo tanto, el concepto de despojo dentro de la Ley 1448 de 2011 es un garantía primaria de dichas relaciones jurídicas, en tanto se convierte en una técnica normativa de protección de un derecho subjetivo o una expectativa de derecho*”. Lecturas sobre derecho de tierras tomo II pág. 181. Ricardo Sabogal Urrego Universidad Externado de Colombia.

Y qué decir del delito cometido por el señor Muñoz Ocampo asociado, *directamente*, con la situación de violencia vivida por las solicitantes, pues brilla la prueba de la condena de fecha 11 de agosto del año 2006 por el delito de **rebelión**, donde se estableció, *determinadamente*, que el opositor, transportador de la región, prestó colaboración *activa* al frente 47 de las **FARC**, como suministrar información a los insurgentes (*p.ej.*, “*que el esposo y padre de las solicitantes era informante del ejército”, lo que se erigió en una sentencia de muerte que a la postre se ejecutó)*; también transportaba remesas y droga y llevaba noticias al mencionado frente guerrillero.

Opera así la presunción de derecho (ausencia de consentimiento, o causa lícita) en relación con el negocio jurídico celebrado entre una de las víctimas (Dora Lilian Restrepo Muñoz) y José Edilson Muñoz Ocampo, - donde este adquiere el predio objeto de restitución-, condenado por colaboración *activa* con el grupo armado asentado en el municipio de Samaná corregimiento de Encimadas vereda Viboral. Esto apareja, *contundentemente*, la inexistencia del contrato de compraventa aludido. Art. 77 Núm. 1º ley 1448/11.

*Conclusión*: Conforme a lo anterior para la Procuraduría para la Restitución de Tierras el señor José Edilson Muñoz Ocampo **no acreditó** ser poseedor de *buena fe exenta de culpa*, por lo tanto no tiene derecho a la compensación.

Pero, al mismo tiempo, señores magistrados de la Sala de Restitución de Tierras, con todo respeto (como no puede ser de otra forma), el señor José Edilson Muñoz Ocampo para el Ministerio Público no tiene derecho a ningún beneficio, reconocimiento o prestación, en su condición bien sea de *“hombre del campo*; *campesino cultivador*; *cabeza de familia campesina* o *segundo ocupante”* etc., por el hecho **demostrado** de haber participado, favorecido, colaborado, legitimado y concurrido con el desaparecimiento forzado y muerte del propietario del inmueble a restituir, y por intervenir, indirectamente, con el desplazamiento de las reclamantes, como con el despojo, independientemente de haber adquirido la posesión del terreno en una supuesta compraventa legal.

Y debe ser así, aunque ante la jurisdicción ordinaria pagó la pena pertinente, pero en la transicional debe soportar el menoscabo patrimonial por su actuar. Es que el Estado no puede *premiar*, de ninguna forma, a quien contribuyó, *y de qué manera*, a la configuración y ejecución de los hechos víctimizantes que desembocaron en el abandono y desplazamiento de una de las miles de familia que, injustificadamente, sufrieron el holocausto del conflicto armado en Colombia; huella imborrable por siempre en la interminable noche oscura que envuelve a la Patria.

**Petición:**

Señora Magistrada Ponente, el Ministerio Público le solicita considerar lo siguiente:

**-.** **Reconocer** la calidad de víctimas de desplazamiento forzado a las solicitantes, **Flor Marina Muñoz Cortés, Hidalba, Nancy, Dora Liliana, Leidi Diana, Yorleny Restrepo Muñoz y Luz Mary Restrepo Torres** respecto de quienes ha de ordenarse la protección de sus derechos y prerrogativas derivadas de tal condición.

**-.** **Reconocer y proteger** el derecho a la restitución y a favor de la sucesión del causante señor *Luis Eduardo Restrepo Ortiz* del predio “*San Luis Santa Ana*” despojado, ubicado en el corregimiento de Encimadas vereda Viboral municipio de Samaná, Caldas.

Que la **restitución**, observando las motivaciones planteadas, lo sea por **equivalencia**, en consecuencia, para su realización el Fondo de la Unidad de Restitución proceda en forma inmediata al trámite administrativo, que implique el consenso con los beneficiarios y su participación en la búsqueda de terrenos de similares características al restituido, y cerca de la ciudad de Manizales, Caldas

**.- Desestimar** la oposición formulada por el señor **José Edilson Muñoz Ocampo** por las consideraciones expuestas.

**.-** **Declarar** que el opositor **José Edilson Muñoz Ocampo** no acreditó haber actuado con buena fe exenta de culpa, por lo tanto no tiene derecho al pago de la respectiva compensación.

**.-** Y las demás órdenes y disposiciones inherentes a la plena reparación.

Por su cuidado, muchas gracias.



**Héctor Chica Torres**

*Procurador 17 Judicial II Restitución de Tierras*

1. “*DEL DESPLAZADO****.****Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público*”. [↑](#footnote-ref-1)
2. **Se priva del ejercicio legítimo de los derechos sobre las cosas si estos son obstaculizados.** [↑](#footnote-ref-2)
3. Parte resolutiva del fallo citado. [↑](#footnote-ref-3)
4. **“***Se entiende por despojo la acción por medio de la cual, aprovechándose de la situación de violencia, se priva arbitrariamente a una persona de su propiedad, posesión u ocupación, ya sea de hecho, mediante negocio jurídico, acto administrativo, sentencia, o mediante la comisión de delitos asociados a la situación de violencia”* [↑](#footnote-ref-4)